



Nueve meses de guerra en Ucrania

Rusia se atrinchera y la “unidad” occidental hace aguas



Miguel Ángel Domingo
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

La guerra de Ucrania cumple nueve meses. Lo que iba a ser una intervención militar rápida, atendiendo a la propaganda y los planes iniciales del Gobierno de Putin, se ha transformado en una brutal guerra de desgaste que ya implica abiertamente al ejército ruso y la maquinaria militar y política de la OTAN, o más exactamente a la de EEUU.

Solo los propagandistas del Departamento de Estado, y sus portavoces en la izquierda asimilada, niegan la realidad: no estamos ante una guerra de liberación en defensa de un pequeño país indefenso, sino ante una guerra imperialista librada entre Washington y Moscú, en la que EEUU ha hecho todo lo que está en su mano por iniciar y enconar el conflicto, arrastrando a una Europa que está suicidándose económicamente, y Rusia cuenta con el firme apoyo de China y muchos otros países que han rechazado la política de sanciones occidentales.

Ucrania ha recibido más de 41.000 millones de euros de ayuda militar, más de siete veces el presupuesto militar ucraniano de 2022, o el 86% del presupuesto militar ruso de este año. Miles de soldados ucranianos están siendo entrenados en bases de toda Europa y el aparato de inteligencia de la OTAN y el Pentágono está a pleno rendimiento ofreciendo apoyo esencial. En definitiva, un ejército con tropas ucranianas pero dirigido por Washington.

Washington contra el mundo. La “unidad” europea se resquebraja

La Administración Biden no ha hecho sino profundizar la política del nacionalismo económico de Trump, que se ha traducido en una declaración de guerra comercial contra el resto del mundo, para empezar contra sus principales aliados. Una política que ha revalorizado el dólar en un 20% y que se ha visto reforzada con la ley para la reducción de la inflación, que ofrece recortes de impuestos e incentivos para las empresas que inviertan en el país.

Esta ley es toda una patada en la boca a sus aliados de la UE. En septiembre, *The Wall Street Journal* afirmaba que el gran ganador de la crisis energética era EEUU y que industrias europeas estaban trasladando producción a suelo estadounidense por los altos precios de la energía en Europa. Pero el tono de las quejas de los funcionarios de la UE ha subido mucho tras comprobar como su amado amigo del otro lado del Atlántico les está robando la cartera.

EEUU está vendiendo gas natural licuado a Europa a cuatro veces el precio que pagan las empresas estadounidenses por él. Cuando en la última cumbre del G20 en Bali, funcionarios europeos pidieron explicaciones a Biden por esto, el presidente norteamericano se limitó a señalar que no conocía el problema.

En las últimas semanas se han sucedido las declaraciones desde París y Berlín criticando las medidas proteccionistas

de Washington, hasta llegar a una declaración conjunta de sus ministros de Economía el 22 de noviembre, donde piden una respuesta a la política estadounidense sobre la base de una “política industrial europea”. Una moderación que no gusta a Macron y sus ministros que están siendo mucho más beligerantes, hasta el punto de que plantean una ley europea contundente para enfrentar la estrategia estadounidense, lo que supondría una guerra comercial abierta.

Pero la burguesía francesa no es la única agraviada por la guerra y el desastre que está significando para la economía y la estabilidad política de Europa. La clase dominante alemana se enfrenta a una dura recesión en medio de profundas divisiones. El canciller Scholz llama patéticamente a la calma y a evitar una guerra comercial, pero al mismo tiempo viaja a Beijing para reunirse con Xi Jinping y asegurarle que las inversiones en China de las empresas alemanas van e irán viento en popa.

No solo se resquebraja la supuesta unidad entre EEUU y la UE, sino que las grietas entre los propios socios europeos crecen cada día. El margen para el capitalismo europeo se acaba.

La retirada de Jersón y la estrategia rusa

Tras la retirada de Járkov en septiembre, el abandono ruso de la ciudad de Jersón a comienzos de noviembre ha provocado ríos de tinta en los medios occidentales. Según pasan las semanas parece

evidente que se trata de un repliegue ordenado dentro de una estrategia militar bastante pensada y que no tiene que ver con ningún tipo de victoria militar ucraniana sobre el terreno.

Es cierto que Jersón era la única capital controlada por Rusia desde febrero, y hace pocas semanas había sido formalmente anexionada a Rusia. Además era la cabeza de puente para cualquier hipotético avance hacia Odesa. En este sentido se trata lógicamente de un golpe político para Putin. Pero desde un punto de vista militar, la ciudad que está situada en la orilla occidental del río Dniéper, el más caudaloso de Ucrania, estaba siendo objeto de los bombardeos ucranianos desde verano, inutilizado el principal puente que lo cruza y obligando a sostener la logística rusa a base de pontones y ferris. El nuevo general al mando de las tropas rusas en Ucrania, Serguéi Surovikin, ha considerado que mantener esa posición podría imponer un gran coste y pocas ventajas a corto plazo.

La llegada de Surovikin y la decisión de concentrar los esfuerzos en las zonas controladas del Donbás está suponiendo un punto de inflexión en la estrategia militar rusa. Desde que fracasó la operación rápida para tomar Kiev se han sucedido los generales al mando y los objetivos, la mayor parte de las veces sin que estuviera clara la estrategia general. Mientras, en estos meses la artillería proporcionada por Occidente a Ucrania ha golpeado de forma importante las vitales líneas de suministro rusas.

A la vez, las columnas blindadas rusas han sido duramente castigadas. Analistas militares hablan de 1.500 tanques perdidos y más de 8.000 vehículos. Es imposible saber si esta cifra es real pero dada la multitud de imágenes de vehículos de todo tipo destruidos, abandonados o recuperados por el ejército ucraniano es evidente que las cifras serán muy altas.

Peor que los vehículos perdidos, que se pueden reponer en mayor o menor medida, es el saldo de bajas. Ucrania ha avanzado sobre Jersón a costa de miles de muertos y heridos en sus tropas, pero los logros rusos están teniendo también un coste muy alto en pérdidas de hombres.

La inteligencia occidental habla de 100.000 bajas, entre muertos y heridos, tanto para Rusia como para Ucrania. Es igualmente imposible corroborar estas cifras, pero para hacernos una idea en diez años de guerra en Afganistán murieron entre 14.000 y 26.000 soldados soviéticos. Las pérdidas humanas de estos meses significan para Rusia una parte importante de sus mejores tripulaciones de tanques, de tropas de primera lí-





nea de las unidades más capaces y de sus oficiales al mando.

Después de meses resistiéndose, Putin decretó una movilización parcial de 300.000 nuevos soldados. Pero hay que formarlos y equiparlos. Todo indica que el plan de Surovikin pasa por ceder Jersón y dejar que el Dniéper cumpla su papel de frontera natural. Mientras, utilizarán el invierno para reforzar sus posiciones y reponer las pérdidas, golpear duramente con artillería las posiciones ucranianas, y de paso evitar cualquier intento de Zelenski y la OTAN de partir en dos el corredor terrestre que une Rusia a Crimea.

A la vez, los mandos militares de Moscú están en una campaña de bombardeos sobre infraestructuras energéticas ucranianas con efectos muy importantes: dos tercios del país sufren cortes de luz o de agua mientras llegan las primeras nieves. Por eso la decisión ucraniana de comenzar a evacuar Jersón, sin condiciones para garantizar luz, agua, etc., apenas unos días después de celebrar su “liberación” con visita de Zelenski incluida, confirma que este plan le podría dar buenos resultados a Rusia.

La llegada de las bajas temperaturas congelará el suelo y dejará a las tropas ucranianas sin parte del camuflaje que le han ofrecido los bosques. Y las privaciones, el desabastecimiento y el frío extremo entre la población se convertirá en un factor político de primer orden que presionará a Zelenski y Biden.

¿Un acuerdo en el horizonte?

En las últimas semanas se han sucedido las declaraciones de altos funcionarios estadounidenses instando a Ucrania a ser “realista” en sus pretensiones. A la vez, el general Mark Milley, el militar norteamericano de mayor rango, ha sido mucho más claro a la hora de hablar públicamente a favor de abrir una negociación de paz.

Los contactos entre Rusia y EEUU, que nunca se han cortado del todo, se han vuelto a intensificar hasta llegar a un encuentro en Turquía entre los máximos responsables de inteligencia.

Es significativo que las voces más claras sobre una posible negociación vengan del Pentágono, y que no dejen de argumentar que sobre el terreno Ucrania no puede aspirar a ganar más y que la retirada de Jersón puede ser un punto de partida para discutir. Pero desde la Casa Blanca llaman a mantener la estrategia: seguir armando a Ucrania y desgastando a Rusia.

Negociar la paz podría parecer algo razonable para cualquiera, entonces ¿por qué Biden mantiene una posición tan salvaje? Porque lo que está en juego no es la seguridad de Ucrania o la “democracia”. El problema es la decadencia de Washington y su negativa en redondo a renunciar a sus ambiciones imperialistas y a la hegemonía.

China le ha ganado la partida en Asia, en América Latina y en África, y ahora asistimos a la batalla por la supremacía en Europa. Esto es lo que explica el militarismo de Biden. Y la incapacidad de Washington por imponerse es lo que está detrás de las divisiones mencionadas. Hace unos meses eran solo sectores del Partido Republicano, después sectores de los demócratas, del Pentágono y ahora están emergiendo las profundas tensiones acumuladas durante meses con los países de la UE, empezando por Francia y Alemania.

A pesar de la propaganda y de los golpes que han podido dar al ejército ruso en el frente, el imperialismo estadounidense muestra cada vez más sus limitaciones para salir victorioso de esta guerra. ¿Cuánto tiempo podrá asegurar los niveles actuales de equipamiento al ejército ucraniano? Los stocks europeos están en situación crítica y los estadounidenses empiezan a dar señales de alarma.

Rusia está jugando a que el tiempo corra a su favor, confiando en soportar mejor el desgaste. Putin no conseguirá sus objetivos en Ucrania en una mesa negociadora si antes no los ha alcanzado sobre el terreno. Todo indica que el plan de Surovikin es preparar las fuerzas para una nueva ofensiva más adelante salvo que consiguieran la rendición ucraniana machacando sus infraestructuras, algo que a priori parece bastante difícil.

La situación sigue abierta y hay muchos factores que la hacen impredecible: hasta dónde llegue el imperialismo occidental en su apoyo a Ucrania, en un momento en que se ven cada vez más fracturas; los efectos políticos de la lucha de clases en Europa y EEUU; la dureza de la próxima recesión... Puede haber algún tipo de negociación o incluso una tregua, pero aún no se ha impuesto ninguno de los dos bandos lo suficiente como para que la situación se pueda resolver con un acuerdo de paz inmediato. La paz en una guerra imperialista siempre la dicta el vencedor en el campo de batalla.

Un programa internacionalista y de clase contra esta guerra

Los únicos que se están beneficiando con esta guerra son los grandes capitalistas vinculados a los monopolios, la banca y la industria militar, engordando sus beneficios a costa de los pueblos de Ucrania, de Rusia, de Europa y del mundo.

Conocemos de sobra las “guerras por la democracia” del imperialismo estadounidense, esa excusa cínica para ocultar la brutalidad de sus intervenciones criminales a lo largo de décadas. Por otro lado, el régimen de Putin es valedor de los intereses de la oligarquía capitalista y nacionalista gran rusa, surgida de la destrucción de la URSS y del saqueo de la propiedad nacionalizada. Putin es un anticomunista declarado, un adversario de Lenin y los bolcheviques como él mismo proclamó, y encubre las anexiones que llenarán los bolsillos de la plutocracia rusa con guiños demagógicos a desnazificar Ucrania.

Ante una guerra como esta, reaccionaria por ambos lados, levantamos el programa del internacionalismo, de los comunistas como Lenin o Liebknecht desde hace más de un siglo: ¡Abajo la guerra imperialista! ¡Fuera las tropas de Putin y la OTAN de Ucrania! Defendemos el derecho de Ucrania a la autodeterminación y la independencia, pero eso no significa colocarnos en la barricada del Gobierno reaccionario ucraniano. Luchamos por una Ucrania socialista y una Rusia socialista.

Llamamos a la acción revolucionaria de la clase obrera ucraniana, lo que supone romper con cualquier subordinación al imperialismo y a su Gobierno títere. La clase obrera de Rusia también está llamada a ajustar cuentas con su propio Gobierno imperialista. No tiene nada que ganar en esta guerra y no podrá ser libre si sostiene la opresión de otros pueblos como el ucraniano.

Aunque en un periodo de tiempo se llegue a algún tipo de acuerdo de paz, y este sea recibido con esperanza por millones de personas en Ucrania y en el mundo, será una paz imperialista, entre bandidos. La única posibilidad de una paz justa, y de evitar nuevas guerras imperialistas, será cuando derroquemos a los Gobiernos capitalistas que han llevado a esta masacre y el poder pase a la clase obrera. ¡Abajo la guerra! ¡Socialismo o barbarie!

Puedes leer el artículo completo en izquierdarevolucionaria.net



► izquierdarevolucionaria.net

Un Bonaparte para conquistar el mundo

El capitalismo chino y la lucha por la hegemonía



Suprimir el delito de sedición para aumentar la represión contra la protesta social

El timo de la reforma del Código Penal



La propuesta de reforma del Código Penal presentada por el Gobierno ha desencadenado la furia de la derecha y la extrema derecha. “¡Traición!” aúllan los portavoces del PP y Vox. El motivo principal que desencadena esta avalancha de patriotismo de la reacción es la desaparición del delito de sedición, el tipo penal que utilizó el Ejecutivo de Rajoy y el Tribunal Supremo para castigar con máxima dureza a los dirigentes del independentismo catalán y, de paso, sentar un precedente punitivo para futuras protestas sociales masivas.

Aunque la derecha se rasga las vestiduras, la realidad es que esta reforma no va a mejorar la situación de la inmensa mayoría de los 3.500 represaliados en las 44 causas judiciales abiertas a raíz de la crisis catalana de 2017, que quedan abandonados a su suerte. Solo los dirigentes independentistas, que han dado la espalda a la lucha por la república catalana y han optado por aliarse con el Gobierno, van a salir beneficiados.

Pedro Sánchez busca enterrar la lucha por la república catalana

Es cierto que se elimina un tipo penal regresivo como es la sedición, pero se sustituye por una definición ampliada del delito de desórdenes públicos que amenaza gravemente al ejercicio de los derechos básicos de reunión y manifestación.

El objetivo inmediato de esta reforma es contribuir a liquidar definitivamente la masiva rebelión del pueblo catalán por sus derechos democráticos, nacionales y sociales, por la república y contra el régimen del 78. El PSOE se ha apoyado en los dirigentes de ERC y Junts, que han vaciado de contenido real al movi-

miento por la liberación nacional, mientras que, desde la Generalitat, trabajaban en pro de los intereses de la banca y las grandes empresas.

Pero esta política de colaboración entre el Gobierno PSOE-UP y ERC y Junts se topaba con un serio obstáculo: las actuaciones judiciales contra dirigentes y participantes del procés, que mantienen en el exilio a destacados políticos de la derecha y la socialdemocracia catalanista. Los indultos parciales aprobados por el Gobierno en junio de 2021, que liberaron a nueve dirigentes encarcelados, fueron un primer paso para intentar desactivar la mayor crisis sufrida por el régimen del 78. Ahora se completará con la eliminación del tipo penal que pesaba sobre los dirigentes de ERC y Junts, y probablemente con otra reforma del delito de malversación del que están también acusados esos dirigentes.

Este delito fue redefinido por el Gobierno del PP en 2015 para incluir conductas que hasta entonces no eran delictivas. La finalidad: disponer de una herramienta represiva más en caso de que el movimiento por la liberación nacional ganase impulso y promoviese un referéndum para decidir libre y democráticamente el futuro de Catalunya.

Con esta reforma del Código Penal, el Gobierno facilita una más amplia colaboración con ERC y Junts, sin comprometer la legislación represiva ni el aparato estatal plagado de fascistas que sirvieron para aplastar violentamente la rebelión del 1-O. De paso, Pedro Sánchez espera mejorar sus expectativas electorales en Catalunya y asegurar al PSC unos votos decisivos que le permitan alcanzar una mayoría suficiente para gobernar tras las elecciones generales de 2023.

Un grave endurecimiento de la legislación represiva

El PSOE se ha cuidado de que estas medidas no solo no debiliten, sino que incluso refuercen la legislación represiva aplicable a la protesta social. La excusa de “normalizar” la vida política catalana es perfecta para preparar los instrumentos represivos ante una previsible ola de conflictos como reacción al imparable deterioro de las condiciones de vida de la mayoría.

Por eso, la desaparición del delito de sedición va acompañada de una reformulación del delito de desórdenes públicos que permitirá criminalizar aún más todo tipo de protestas pacíficas. Es más, la pena mínima por desórdenes públicos agravados pasará de 2 a 3 años, garantizando así que los condenados por este delito ingresen en prisión.

Hasta este momento, los desórdenes públicos implicaban el uso de violencia contra las personas o las cosas. Esta reforma añade otro factor: la intimidación. Baste que alguien alegue sentirse intimi-

dad por una manifestación, concentración o sentada pacíficas para que el nuevo tipo penal les sea ampliable a los participantes. Las frecuentes alegaciones policiales de que los manifestantes les “miran mal” entran así en el Código Penal y permitirán condenar a prisión a los autores de tan temibles miradas.

Pero por si acaso el carácter pacífico fuese tan evidente que no hubiese lugar a alegar intimidación, un nuevo artículo, el 557 bis, especifica que irán a prisión quienes “sin hacer uso de violencia o intimidación (...) actuando en grupo invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público y causen con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal”.

Cualquiera que participe en un escrache, en protestas contra desahucios en una sucursal bancaria, cualquier trabajador que durante una huelga permanezca en las instalaciones de su empresa, o incluso quien proteste en el interior de un edificio de acceso público —por ejemplo, las oficinas de una compañía eléctrica— y su acción sea apoyada por alguno de los presentes, puede ser acusado de este nuevo delito y su suerte quedará en manos de un juez que deberá interpretar conceptos tan volátiles como “perturbación relevante de la paz pública” o el más etéreo de “la voluntad del titular”.

El carácter reaccionario y franquista del sistema judicial está fuera de duda. Su salvaje represión del pueblo catalán tras el intento de ejercer libre y pacíficamente su derecho a decidir es un buen ejemplo, al igual que la persecución judicial a huelguistas o las penas de cárcel a raperos críticos con la monarquía y el régimen del 78... Ahora somos testigos de la velocidad con que los jueces excarcelan o rebajan penas a agresores sexuales haciendo un uso torticero de la nueva ley del “solo sí es sí”.

Poner en manos de esos jueces fascistas disposiciones legales que permitan criminalizar la protesta social es un ataque a las libertades y derechos democráticos que no podemos admitir. Unidas Podemos, que se comprometió a derogar la tristemente célebre Ley Mordaza, no puede permitir que no solo no se derogue esta ley, sino que se endurezcan las medidas punitivas contra acciones colectivas de protesta pacífica.

Unidas Podemos tiene que rectificar, retirándose de esta peligrosa ampliación del delito de desórdenes públicos. De lo contrario pesará sobre ellos esta reaccionaria agresión a los derechos democráticos. Al mismo tiempo consideramos insuficiente la desaparición del delito de sedición, y seguiremos luchando por la amnistía para los represaliados del 1-O y de la lucha por la libertad del pueblo catalán.



► izquierdarevolucionaria.net

Pablo Iglesias y Yolanda Díaz

Cosechando lo que se siembra





Ofensiva de la derecha y la judicatura franquista contra la ley del “solo sí es sí”



Libres y
Combativas

El 7 de octubre entró en vigor la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del “solo sí es sí”. Desde entonces varios tribunales territoriales han revisado escandalosamente a la baja las condenas a violadores, agresores y pedófilos. Incluso el abogado de La Manada ha anunciado que solicitará la revisión de la pena de uno de los condenados para lograr una reducción de, al menos, un año.

Evidentemente, la judicatura machista, clasista y franquista está utilizando huecos y carencias que la ley contiene para redoblar los ataques contra las mujeres y demostrar quién manda aquí.

El anuncio de las primeras rebajas de penas y excarcelaciones ha sido cogido con las dos manos por una derecha y extrema derecha envalentonadas. El PP, en un ejercicio de sinvergonzonería mayúsculo y haciendo demagogia, y su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, han tardado poco en exigir el cese de Irene Montero como ministra de Igualdad y en salir a defender a jueces y fiscales. “Las mujeres españolas pueden estar tranquilas con el trabajo y labor que desarrollan” ha dicho esta ricachona reaccionaria.

Que el PP se presente como el defensor de los derechos de las mujeres es un insulto para todas las jóvenes y trabajadoras que hemos llenado las calles contra las sentencias machistas y hemos denunciado a esta justicia franquista. Los herederos de la dictadura, los que gobiernan con Vox, los protectores de los empresarios violadores, los que justifican nuestra explotación más salvaje, los homófobos y transfobos, los de la “patria, familia, dios y bandera”, son los enemigos declarados de los derechos de la mujer porque siem-

pre han estimulado todas las formas posibles de violencia contra nosotras.

El PSOE cierra filas con el PP y sale en defensa de los jueces machistas

Pero no solo la extrema derecha está cargando contra la ley del “solo sí es sí” e Irene Montero. Tras las declaraciones de la ministra de Igualdad —que señalaba a los jueces como responsables de las reducciones de condenas a los magistrados— la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha decidido utilizar el mismo lenguaje que el PP. “Absoluto respeto a los jueces en su trabajo y desempeño”, “los jueces son los que tienen que interpretar las normas conforme a su espíritu y confío en que esto vaya a ser así”, “hay separación de poderes”... ha dicho para su vergüenza y la de todas las mujeres que sufrimos el machismo y su violencia.

En un momento en que Vox no solo ha presentado una petición al Congreso para reprobar a Irene Montero, sino que se siente impune para lanzarse a su linchamiento público desde la tribuna del Congreso, desplegando toda su violencia machista y fascista, cuando los medios de comunicación del sistema están utilizando este caso para atacar con aún más fuerza al movimiento feminista —y todo esto a pocos días del 25N—, el PSOE vuelve a demostrar en qué barricada se coloca cuando se trata de condenar el carácter reaccionario y fascista de la judicatura.

¡Hay que depurar ya el aparato del Estado!

Ahora mismo, Irene Montero está siendo el blanco de los ataques de la derecha y de personajes del feminismo más institucionalizado y de moqueta. Libres y Combativas hemos sido y somos muy críticas con la gestión de Unidas Podemos en el Gobierno central, pero eso no nos impide ver que al frente de esta campaña están nuestros enemigos de clase y persiguen una finalidad política muy clara: golpear, desmoralizar y perseguir al masivo movimiento en las calles que ha colocado los derechos de las mujeres trabajadoras y jóvenes en el centro del debate.

Enviamos nuestra solidaridad a Irene Montero contra estos ataques de la reacción, pero también le decimos que no pensamos que la solución a que los jueces y juezas machistas “apliquen erróneamente la ley” pase por “reforzar la formación obligatoria al personal judicial”. La única forma de combatir el carácter reaccionario, franquista y machista del aparato judicial es depurarlo por completo, no con cursos de formación o pactando con el PP la colocación de dos ultraderechistas al frente del Tribunal Constitucional.

Libres y Combativas siempre nos hemos posicionado a favor de todas aquellas medidas que hagan avanzar en derechos a las más oprimidas y explotadas de la sociedad. Queremos que las leyes sean lo más progresistas posibles y que nuestros agresores reciban castigos ejemplares. Sabemos que los cambios en la legislación

son en muchos casos el fruto de la lucha de masas por abajo. ¿Existiría la ley del “solo sí es sí” si en 2018 no hubiera habido una rebelión en las calles contra la sentencia de La Manada? ¿O sin que una marea morada de millones de mujeres y hombres cada 8-M demuestre su fuerza y carácter de clase? Por supuesto que no.

Pero el simple hecho de aprobar una ley no garantiza que se vaya a cumplir, o que nuestro derecho a la libertad sexual —en este caso concreto— esté protegido. A la mayoría de jueces y juezas no les falta educación con perspectiva de género, les sobra fascismo y odio de clase. Por eso, la única solución pasa por depurar el aparato del Estado, la judicatura, la policía, el Ejército, de esta calaña de fachas con toga que no dudarán en seguir aplastándonos en cuanto tengan la posibilidad.

Y hay que hacerlo ya. Pero sobre la base de la movilización más decidida y enérgica, de la organización de las mujeres trabajadoras y jóvenes. La violencia machista es una lacra social que nace del capitalismo. Solo derribando este sistema podremos ser libres.

Ya en la calle la segunda edición

Puedes adquirirlo en:
• fundacionfedericoengels.net
• libresycombativas.net



► izquierdarevolucionaria.net

25N. Tomando las calles contra la violencia machista y la justicia patriarcal



Afiliate a IZQUIERDA REVOLUCIONARIA y construye con nosotros las fuerzas del marxismo internacional

ANDALUCÍA: Cádiz 682 276 436 · Córdoba 619 033 460 · Granada 616 893 592 · Huelva 695 618 094 · Málaga 611 477 757 · Sevilla 600 700 593 · ARAGÓN: Zaragoza 640 702 406 · ASTURIAS: 686 680 720 · CASTILLA-LA MANCHA: Guadalajara 949 201 025 · Puertollano 650 837 265 · Toledo 699 956 847 · CASTILLA Y LEÓN: Salamanca 653 699 755 · CATALUNYA: Barcelona 933 248 325 · Tarragona 660 721 075 · EUSKAL HERRIA: Araba 625 707 798 · Bizkaia 664 251 844 · Gipuzkoa 685 708 281 · Nafarroa 635 919 738 · EXTREMADURA: 638 771 083 · GALIZA: A Coruña 678 420 888 · Compostela 637 809 184 · Ferrol 626 746 950 · Ourense 604 024 366 · Vigo 679 500 266 · MADRID: 914 280 397 · PAÍS VALENCIÀ: 685 098 482

www.izquierdarevolucionaria.net • contacto@izquierdarevolucionaria.net • [f](https://www.facebook.com/izquierdarevolucionaria) [i](https://www.instagram.com/izquierdarevolucionaria) [t](https://twitter.com/izquierdarevolucionaria) @IzquierdaRevol

Qatar 2022

El Mundial de la vergüenza

► VIENE DE LA CONTRAPORTADA

Lágrimas de cocodrilo y beneficios multimillonarios

A medida que toda esta barbarie salía a la luz, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, colectivos feministas y LGTBI exigieron que se retirase a Qatar la organización del Mundial. La respuesta de los gobiernos, empresas e instituciones capitalistas ha brillado por su cinismo e hipocresía. La FIFA, organizadora de la competición espectáculo, y las multinacionales asociadas han anunciado un fondo de 440 millones de dólares para indemnizar a las familias de los trabajadores fallecidos. Una gota en el océano de ingresos multimillonarios que tendrán.

Qatar ha gastado en este mundial... ¡200.000 millones de dólares! Para hacerse una idea, hasta ahora el mayor gasto vinculado a eventos deportivos eran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con 15.400 millones, y otra cita futbolística: Brasil 2014, con 15.000. No sabemos quién levantará la Copa el 18 de diciembre, pero el mundial ya tiene ganador: los grandes bancos y empresas multinacionales, que han visto en la explotación a la carta del régimen catari un filón para multiplicar sus ya obscenos beneficios.

Solo los bancos y empresas occidentales, con la Unión Europea liderando la lista (incluidos los españoles BBVA, Santander, Caixabank, OHL, Sacys...) han invertido 86.000 millones de euros en proyectos y préstamos tanto al régimen como a empresarios cataries. Con esta lluvia de millones ¿a quién sorprende que los llamamientos al boicot hayan caído

en saco roto? Eso sí, mientras hacen caja, las empresas, la FIFA, los gobiernos de los 32 países participantes e instituciones internacionales derraman lágrimas de cocodrilo y preparan campañas mediáticas por los derechos humanos.

Especialmente bochornoso es el caso de gobiernos que se declaran de izquierdas o progresistas como los del Estado español, Portugal, México o Argentina, que no se han diferenciado en nada a la hora de participar en este “pan y circo” levantado sobre la sangre de miles de trabajadores y la opresión de millones. Por no hablar del escandaloso comunicado de apoyo al régimen catari del Gobierno venezolano de Maduro.

Entre la inmensa mayoría de jugadores participantes, empezando por las grandes estrellas, también se ha impuesto el bozal de oro. Algunos, muy pocos, presionados por el movimiento internacional de rechazo, han hecho declaraciones críticas y han planteado gestos simbólicos como llevar brazaletes en apoyo a la comunidad LGTBI pero sin atreverse a ir más allá. A la hora de la verdad muchos ya lo han incumplido.

No son “cosas del fútbol”, es el capitalismo

La versión más extendida de por qué, pese a todas las denuncias, Qatar 2022 ha terminado celebrándose es que los corruptos directivos de la FIFA fueron sobornados y, como esta es “independiente” y “faltan pruebas concluyentes”, era imposible evitarlo. Esta “explicación” es tan falsa como cínica.

La corrupción de la FIFA, que ganará 5.600 millones de dólares con este mundial, es un secreto a voces hace décadas. El escándalo de las comisiones cataries estalló en 2012. De los 22 responsables

de designar la sede del mundial, 16 fueron procesados o encarcelados en 2015 por diferentes casos de corrupción. Pero Qatar 2022 siguió viento en popa. Ninguno de los bancos y multinacionales que dominan la economía mundial (y con ella el negocio deportivo) estaba dispuesto a renunciar a su pedazo del pastel.

Al interés económico se unía el geopolítico. En plena pugna entre las grandes potencias imperialistas por las materias primas, mercados y áreas de influencia, Qatar —uno de los principales productores petroleros y segundo exportador mundial de gas— representa un socio codiciado. La clase dominante catari apostó al mundial no solo por los beneficios económicos a corto plazo, también como medio para aumentar su influencia regional por la que rivaliza con Arabia Saudí. Cuando la FIFA adjudicó este mundial (2010), el imperialismo francés y otras potencias presionaron a favor de Qatar frente a la principal candidatura rival, EEUU, a cambio de concesiones para sus multinacionales energéticas y armamentísticas.

La detención de decenas de directivos de la FIFA, tras una investigación del FBI y fuertes presiones estadounidenses, fue presentada como un golpe decisivo a la corrupción en el fútbol. Pero Washington solo buscaba vengar la afrenta, dejar claro que quien le desafíe puede pagarlo y asegurar a sus multinacionales una posición dominante en el siguiente mundial. La Copa del Mundo 2026 ya ha sido adjudicada a la candidatura conjunta Canadá-México-EEUU.

La transformación de los mundiales, olimpiadas y otras competiciones deportivas nacionales e internacionales en negocios cada vez más turbios y lucrativos, que mueven cantidades obscenas de capital, donde los clubes —transformados en sociedades anónimas— son trampolines políticos y económicos para aventureros vinculados a la derecha y ultraderecha, pelotazos especulativos, blan-

queo de capitales... hunde sus raíces en el funcionamiento del capitalismo.

Un deporte corrompido por un sistema en decadencia

La clase dominante siempre ha utilizado el deporte como arma económica y política. Los regímenes fascistas de Hitler, Mussolini o Franco y las dictaduras militares latinoamericanas de los 70 y 80 del siglo XX protagonizaron algunos de los casos más escandalosos, empleando éxitos deportivos para legitimar su brutal represión e intentar desviar la atención de sectores de las masas.

Esta utilización acaba encontrando límites. El principal, la propia crisis y decadencia capitalista y sus efectos sobre la lucha de clases. Momentos de ascenso en las luchas y giro a la izquierda, procesos revolucionarios y prerrevolucionarios han tenido su reflejo incluso en un mundo tan alejado de las condiciones de vida de los oprimidos como el deporte de élite. El movimiento por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam en EEUU, la revolución argelina o el ascenso revolucionario latinoamericano de los 70 y 80 fueron ejemplos destacados. Una capa de deportistas, influidos por las masas, giró a la izquierda.

Pero generalmente, y más en épocas “normales”, las condiciones privilegiadas del deporte de élite hacen que las voces críticas sean excepcionales, limitadas a gestos simbólicos o presentadas como excentricidades. Mientras, los medios dan todo el apoyo a aquellos deportistas que apoyan a la derecha y ultraderecha, que son promocionados y tienden a ser mayoría. Esto se ha intensificado durante los últimos años.

Desde los años 70, cuando las multinacionales entraron masivamente al negocio deportivo, participando directamente en la organización de mundiales, olimpiadas y campeonatos de liga, este se ha convertido en un campo de inversión cada vez más atractivo y rentable para los capitales especulativos. Desde 2010 numerosos expertos e incluso directivos vienen advirtiendo de la burbuja del deporte, las contradicciones generadas por la entrada de fondos de inversión, casas de apuestas, etc. o las cantidades escandalosas e insostenibles gastadas anualmente en fichajes, traspasos y derechos televisivos. Pero la orgía especulativa continúa.

Qatar 2022 no es la excepción, sino la regla. El deporte refleja en su interior toda la corrupción, especulación y barbarie de este sistema podrido.



La lucha por unas condiciones de trabajo dignas continúa



Antonio Muñoz
Izquierda Revolucionaria
Cádiz

Se cumple el primer aniversario de la gran huelga del metal de Cádiz, una lucha que marcó un antes y un después en el movimiento obrero gaditano y que tuvo, y sigue teniendo, hondas repercusiones en todo el Estado.

Aunque la negociación de un nuevo convenio colectivo fue el elemento desencadenante, la huelga fue un auténtico levantamiento social contra años de precarización de las condiciones laborales y de creciente dismantelamiento de las instalaciones industriales de la provincia. Un levantamiento que despertó una ola de simpatía y apoyo sin precedentes.

La primera reacción del Gobierno PSOE-UP fue lanzar una durísima ofensiva represiva, pero las porras, las pelotas de goma y la famosa tanqueta con la que se intentó intimidar a la población obrera de la Bahía se demostraron inútiles ante la unidad y la firme voluntad de lucha de los trabajadores del metal.

La movilización dio un gran paso adelante con la manifestación del 23 de noviembre, impulsada enérgicamente desde el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria. Esa manifestación demostró bien a las claras que los dirigentes de CCOO y UGT carecían del más mínimo apoyo y autoridad entre los huelguistas, hasta el punto de que, sin que nadie los presionara, abandonaron la manifestación, que finalmente fue disuelta de forma brutal por la policía.

Alarma en el Gobierno y la patronal

La intensificación de la lucha y la incapacidad de los dirigentes de CCOO y UGT para encauzarla hicieron saltar todas las alarmas en la patronal y el Gobierno, que se dieron cuenta de que estaban ante mucho más que otra huelga por un convenio.

FEMCA, la patronal gaditana del metal, hizo exactamente lo mismo que el resto de patronales: bajar salarios y extender jornadas, precarizar el mayor número de empleos y engordar sus beneficios a cualquier precio, aunque la consecuencia fuese un incremento salvaje de la siniestralidad laboral. Los tres últimos convenios del metal de Cádiz habían sido firmados sumisamente por CCOO y UGT, sin conflicto y sin movilización, pese a suponer un abierto retroceso, y nada indicaba que la firma del nuevo convenio transcurriese por otras vías.

Por eso, cuando los trabajadores del metal gritaron alto y claro: “¡Basta ya!”, un escalofrío sacudió a los empresarios de todo el país, que se preguntaban si podría ser el inicio de una rebelión de la clase obrera. El recuerdo de las impresionantes movilizaciones de 2011-2014 estaba muy reciente y, además, la situación de la clase trabajadora había empeorado notablemente desde entonces. En los siguientes meses tendrían que renovarse importantes convenios y era imprescindible para la patronal que la rebelión de Cádiz fuese aplastada antes de que pudiera extenderse a otras zonas y sectores convirtiéndose en la chispa que encendiese la pradera del malestar social.

Además, esta lucha ponía en evidencia la falsedad del discurso gubernamen-



tal del “escudo social”, de las promesas de que nadie quedaría atrás como consecuencia de la crisis, y desafiaba abiertamente la estrategia de conciliación del Gobierno PSOE-UP con el gran capital para garantizar mejor que la derecha la paz social.

Fue grotesco escuchar las palabras vacías de Yolanda Díaz o Enrique Santiago, secretario general del PCE, pidiendo “paciencia” y “confianza” a los trabajadores, mientras que la policía los apaleaba y los tribunales de “justicia” se preparaban para lanzar una ola de represalias contra huelguistas y quienes les apoyaban.

CCOO y UGT, desbordados por la movilización de la clase trabajadora

Pero el principal elemento de pánico de la clase dominante y del Gobierno fue constatar que los dirigentes de CCOO y UGT eran incapaces de controlar la huelga, a pesar de que ellos fueron los convocantes.

La burocracia sindical convocó la huelga con la única finalidad de aliviar la presión desde abajo y, tras unos días de paros, firmar el convenio que la patronal les ponía delante, con la excusa de

que continuar la huelga era insostenible. Su ausencia en los piquetes y su vergonzoso silencio ante la represión revelaban que su intención era acabar con la huelga lo antes posible y volver a la cómoda rutina de sus despachos.

Pero esta vez fue distinto. La juventud trabajadora, los que más directamente sufren la precariedad y la pobreza, quienes más comprenden el verdadero papel que juega la burocracia sindical, ocupó la escena y, uniendo sus fuerzas a los veteranos del sindicalismo combativo, como los compañeros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal y la CGT, desbordaron a los dirigentes de CCOO y UGT.

La clase obrera gaditana demostró así, en las calles, con la fuerza de los hechos, que luchando unidos, con decisión y pasando por encima de los burócratas sindical, tenemos la fuerza para cambiar radicalmente las cosas.

Desde entonces, un número cada vez mayor de trabajadores y trabajadoras han emprendido ese camino de lucha. La reciente huelga del SAD asturiano es un magnífico ejemplo. Al redactar este artículo son las trabajadoras de Inditex las que están en pie de guerra contra el oligarca Amancio Ortega, que ha amasado su inmensa fortuna gracias a la explotación más descarnada de su mano de obra.

La huelga fue liquidada tras la decisión de CCOO y UGT de firmar a espaldas de los trabajadores, en la madrugada del día 23 y justo tras la enorme manifestación que agrupó a la clase obrera y la juventud de Cádiz, un nuevo convenio de miseria. Pero sin duda, la clase trabajadora gaditana volverá a la batalla con fuerzas renovadas.

Mientras tanto, CCOO y UGT empiezan a pagar el precio que corresponde a sus políticas rompehuelgas. Las recientes elecciones sindicales en Mercedes-Benz de Vitoria o en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, que han sido dos sonoras derrotas para ellos, revelan el agotamiento de un modelo sindical de paz social y aceptación del mal menor.

La huelga de Cádiz fue un movimiento pionero. Abrió un camino de lucha, el único útil para construir un sindicalismo combativo y de clase capaz de poner fin a la explotación capitalista.



ELA, LAB y ESK arrasan en las elecciones sindicales de Mercedes Benz en Gasteiz



Qatar 2022

El Mundial de la vergüenza



Miguel Campos
Izquierda Revolucionaria
Internacional

Del 20 de noviembre al 18 de diciembre el mundial de fútbol de Qatar captará la atención de millones de personas. Como cada cuatro años, los grandes medios de comunicación nos bombardearán con imágenes y noticias de la cita. Esta vez, junto a los suculentos beneficios de siempre, esperan que el despliegue mediático haga olvidar el tsunami de denuncias levantado. Y es que Qatar 2022 ya ha entrado en la historia como el mayor escándalo de corrupción, especulación y blanqueamiento de una brutal dictadura asociado a un acontecimiento deportivo, y por el que miles de trabajadores inmigrantes han muerto. Un espectáculo de sangre y explotación despreciable que muestra la hipocresía del gran negocio del fútbol profesional.

“El mundial de la vergüenza”

Así titulaba Amnistía Internacional su informe sobre violaciones de derechos humanos del régimen catari. Un régimen que prohíbe los partidos políticos, man-

tiene en condiciones de semiesclavitud a 1,7 millones de trabajadores inmigrantes (el 90% de la masa laboral), castiga con elevadas penas de cárcel la homosexualidad y las relaciones extramatrimoniales y condena a las mujeres a una opresión y tutela intolerables.

Solo la obra faraónica de los estadios, levantados en pleno desierto con inversiones millonarias para mantenerlos a 22°C mientras la temperatura exterior supera los 40°, ha costado la vida a 6.500 trabajadores. Las brutales condiciones laborales, el trabajo a destajo, sin seguridad, con temperaturas extremas, hacinamiento en infraviviendas, retrasos e impago de salarios... están detrás de esta matanza y de los beneficios de las grandes constructoras y consorcios occidentales, entre ellos muchos españoles.

Unas condiciones que posibilita el kafala, legislación que Qatar comparte con otros regímenes dictatoriales con los que también hacen buenos negocios las empresas europeas. Estas leyes permiten al empleador requisar el pasaporte del trabajador, sometiéndole a condiciones inhumanas que, si rechaza, le dejarán en un limbo legal que puede acabar en la deportación o la cárcel. Muchos trabajadores vienen de Bangladesh, Nepal, India

o Pakistán pagando a mafias o a las propias empresas contratantes entre 400 y 3.500 dólares, contrayendo deudas que, de fallecer, “heredan” sus familias. A la sangría de muertes por accidentes laborales, se suman las causadas por estrés y los suicidios.

Según el informe de Human Rights Watch titulado *Todo lo que tengo que hacer está ligado a un hombre*. Las mujeres y las normas de tutela masculina en Qatar, las leyes cataries exigen a las mujeres permiso de tutores masculinos para casarse, estudiar en el extranjero con becas gubernamentales, acceder a muchos empleos públicos, viajar al extranjero hasta cierta edad o recibir atención a su salud reproductiva. También les impiden ser tutoras principales, no pudiendo decidir sobre documentos, finanzas, viajes e incluso la escolaridad y salud de hijos e hijas. Es el hombre quien decide si la mujer puede divorciarse.

Decenas de miles son obligadas a soportar durante años situaciones de violencia de género y abuso para no perder a sus hijos. Como las relaciones fuera del matrimonio pueden ser castigadas con hasta 7 años de cárcel y cien latigazos, si un violador aduce ser amante de la mujer violada puede ser ella la encarcelada. Para relaciones no heterosexuales las penas de prisión son incluso superiores.



La sangre de miles de trabajadores riega el gran negocio del fútbol espectáculo

CONTINÚA EN LA PÁGINA 6 ►

